



Naciones Unidas

Comité de Expertos en Administración Pública

**Informe sobre el 22º período de sesiones
(27 a 31 de marzo de 2023)**

Consejo Económico y Social
Documentos Oficiales, 2023
Suplemento núm. 24



Comité de Expertos en Administración Pública

**Informe sobre el 22º período de sesiones
(27 a 31 de marzo de 2023)**



Naciones Unidas • Nueva York, 2023

Nota

Las firmas de los documentos de las Naciones Unidas se componen de letras y cifras. La mención de una de tales firmas indica que se hace referencia a un documento de las Naciones Unidas.

Resumen

El Comité de Expertos en Administración Pública celebró su 22º período de sesiones en la Sede de las Naciones Unidas (Nueva York) del 27 al 31 de marzo de 2023. El tema general del período de sesiones fue “Transformación urgente de las instituciones en pro de un mundo más verde, más inclusivo y más resiliente en un momento de múltiples crisis”.

Un mensaje importante del Comité fue que la acumulación de crisis simultáneas estaba mermando la resiliencia de los Gobiernos en todos los niveles, así como su capacidad para hacer frente a las causas profundas de problemas complejos de manera holística y teniendo en cuenta el contexto. Aunque era imprescindible contar con la capacidad necesaria para responder con rapidez y eficacia a las crisis, una atención excesiva a la gestión de las crisis podría redundar en una poca atención relativa a seis enfoques de la formulación de políticas que eran fundamentales para la consecución del desarrollo sostenible: la reflexión a largo plazo; la gestión de riesgos; el uso de los mejores conocimientos disponibles; la participación de los interesados; la promoción de una mentalidad de colaboración entre los trabajadores del sector público; y el aprovechamiento de los mecanismos de gestión de las finanzas públicas para subsanar los déficits de financiación.

El Comité recordó la necesidad urgente de fortalecer la respuesta mundial al cambio climático y recalcó la necesidad de ampliar la capacidad de acceso a la financiación para el clima. Puso de relieve la necesidad de ampliar, con carácter prioritario, la oferta de capacitación y asistencia para mejorar las competencias de los Gobiernos de los países en desarrollo, y de las autoridades subnacionales en particular, para analizar datos y desarrollar proyectos climáticos que atrajeran inversiones. También resaltó el valor de vincular la construcción institucional y la gestión del medio ambiente en el contexto de la consolidación de la paz en los países afectados por conflictos.

El Comité, tras destacar que seguía trabajando en la aplicación de los principios de gobernanza eficaz y que la inclusividad era una piedra angular del desarrollo sostenible, subrayó que los países debían intensificar los esfuerzos por poner en práctica modelos de participación propios que no dejaran a nadie atrás, reforzando al mismo tiempo el entorno propicio para la participación cívica. En cuanto a los indicadores de gobernanza, el Comité convino en que la cobertura multidimensional de cada uno de los 11 principios podría ser útil para perfeccionar el análisis de políticas en relación con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 y que los indicadores deberían ser lo suficientemente detallados como para captar la calidad de la respuesta de un Gobierno a los Objetivos, sin dejar de abordar las carencias analíticas más importantes en los procesos de examen.

El Comité observó que se necesitaban instituciones ágiles, basadas en datos y conocimientos, para mejorar la preparación para la gestión de las crisis y aumentar la resiliencia ante ellas. La creación de instituciones de ese tipo dependería de que se dispusiera de nuevas competencias entre los funcionarios públicos y se fomentara en ellos una mentalidad colaborativa y más centrada en la ciudadanía. Se consideró que parte de la solución radicaba en hacer un examen de la capacidad de la fuerza de trabajo del sector público para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de las actividades de capacitación conexas.

Para afrontar mejor las múltiples crisis, era necesario reforzar la previsión y planificación de los ingresos y la gestión de las finanzas públicas, asegurando al mismo tiempo la rendición de cuentas, la transparencia y la participación en los procesos presupuestarios. Era importante emprender iniciativas para mejorar la credibilidad del presupuesto y reducir las desviaciones presupuestarias excesivas, con el fin de evitar las repercusiones negativas en la consecución de los Objetivos y velar por no dejar a nadie atrás.

El fomento de la innovación en el sector público a través de la tecnología digital seguía siendo una cuestión fundamental y compleja, que tenía implicaciones para todas las partes del gobierno, incluidos los organismos operacionales, las autoridades regulatorias y los órganos de supervisión. El Comité reiteró la necesidad de adoptar enfoques híbridos de la prestación de servicios públicos que reflejaran las necesidades y aspiraciones de las personas, abordando al mismo tiempo los déficits de capacidad digital. Las estrategias digitales nacionales podrían ser útiles para fomentar la confianza digital, reducir las brechas y promover el respeto de los derechos humanos en línea, a lo que cabría sumar los esfuerzos sostenidos por anticipar las repercusiones de los avances tecnológicos en el gobierno y la sociedad y responder a ellas.

Por último, el Comité facilitó un intercambio entre pares sobre los aspectos institucionales de los Objetivos 16 y 17 con los países que realizaron exámenes nacionales voluntarios (Arabia Saudita, Guyana, Malasia y Rwanda) y las ciudades que realizaron exámenes locales voluntarios (Barcelona (España) y Buenos Aires (Argentina)). También celebró una consulta específica con observadores.

El Comité concluyó su período de sesiones con la aprobación de un proyecto de resolución y un proyecto de decisión para que los examinara el Consejo Económico y Social. El Comité también volvió a examinar y reafirmó su contribución al foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible de 2023.

Índice

<i>Capítulo</i>	<i>Página</i>
I. Asuntos que requieren la adopción de medidas por el Consejo Económico y Social o que se señalan a su atención.	6
A. Proyecto de resolución cuya aprobación se recomienda al Consejo Económico y Social	6
B. Proyecto de decisión cuya aprobación se recomienda al Consejo Económico y Social	11
C. Contribución del Comité al foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible.	12
II. Organización del período de sesiones	14
A. Trabajos del período de sesiones	14
B. Asistencia	14
C. Programa	14
D. Elección de la Mesa	15
III. Transformar con urgencia las instituciones para un mundo más verde, más inclusivo y más resiliente en un momento de múltiples crisis	16
A. Mecanismos institucionales para proporcionar apoyo económico, financiero y estructural a fin de enfrentar el cambio climático	16
B. Aplicación de los principios de gobernanza eficaz para el desarrollo sostenible con el fin de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible	18
C. Reinversión de la formación y el aprendizaje institucional de la fuerza de trabajo del sector público para lograr un cambio de mentalidad en el sector	21
D. Gestión de las finanzas públicas en situaciones de emergencia e implicaciones para la credibilidad presupuestaria.	23
E. Fomento de la innovación del sector público a través de la tecnología digital y medición de los efectos del gobierno digital	25
F. Respuesta a los efectos del cambio climático en los esfuerzos de construcción institucional en los países frágiles y en los países que salen de un conflicto.	27
IV. Labor futura del Comité	29
Anexo	
Lista de documentos	30

Capítulo I

Asuntos que requieren la adopción de medidas por el Consejo Económico y Social o que se señalan a su atención

A. Proyecto de resolución cuya aprobación se recomienda al Consejo Económico y Social

1. El Comité de Expertos en Administración Pública recomienda que el Consejo Económico y Social examine y apruebe el siguiente proyecto de resolución:

Informe del Comité de Expertos en Administración Pública sobre su 22° período de sesiones

El Consejo Económico y Social,

Recordando sus resoluciones [2021/12](#), de 8 de junio de 2021, [2022/9](#), de 8 de junio de 2022, y otras resoluciones relativas a la administración pública y el desarrollo, en las que afirmó que el servicio a los ciudadanos debía ser un elemento central de la transformación de la administración pública y que los fundamentos del desarrollo sostenible a todos los niveles eran la gobernanza transparente, participativa y responsable y una administración pública profesional, ética, receptiva e informatizada,

Reafirmando la resolución [70/1](#) de la Asamblea General, de 25 de septiembre de 2015, titulada “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”,

Reafirmando también la resolución [69/313](#) de la Asamblea General, de 27 de julio de 2015, relativa a la Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo,

Reafirmando además el documento final, titulado “Nueva Agenda Urbana”, aprobado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III), celebrada en Quito del 17 al 20 de octubre de 2016¹,

Recordando la resolución [69/327](#) de la Asamblea General, de 14 de septiembre de 2015, en la que la Asamblea reafirmó la importancia que tenían la libertad, los derechos humanos, la soberanía nacional, la buena gobernanza, el estado de derecho, la paz y la seguridad, la lucha contra la corrupción en todas sus formas a todos los niveles y unas instituciones democráticas eficaces e inclusivas y que rindiesen cuentas en los planos subnacional, nacional e internacional como elementos esenciales para facilitar la prestación de servicios públicos inclusivos y responsables en pro del desarrollo sostenible,

Haciendo referencia a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción², que entró en vigor el 14 de diciembre de 2005,

Recordando la resolución [77/150](#) de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 2022, en la que la Asamblea reconoció la necesidad de aprovechar el potencial de las tecnologías de la información y las comunicaciones como un catalizador clave del desarrollo sostenible y de superar las brechas digitales, y destacando que en la

¹ Resolución [71/256](#) de la Asamblea General, anexo.

² Naciones Unidas, *Treaty Series*, vol. 2349, núm. 42146.

implementación de la Agenda 2030 y la Agenda de Acción de Addis Abeba debía tenerse debidamente en cuenta el desarrollo de la capacidad para el uso productivo de dichas tecnologías,

Recordando también la resolución 69/228 de la Asamblea General, de 19 de diciembre de 2014, relativa a la promoción y el fomento de la eficiencia, la rendición de cuentas, la eficacia y la transparencia de la administración pública mediante el fortalecimiento de las entidades fiscalizadoras superiores, en la que la Asamblea puso de relieve que una administración pública eficiente, responsable, eficaz y transparente desempeñaba una función fundamental en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente,

Recordando además la resolución 77/182 de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 2022, relativa al desarrollo de los recursos humanos,

Haciendo referencia a la resolución 74/270 de la Asamblea General, de 2 de abril de 2020, en la que la Asamblea reconoció los efectos sin precedentes que tenía la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), incluida la grave disrupción de las sociedades y las economías, así como de los viajes y el comercio a nivel mundial, y su impacto devastador en los medios de vida de las personas, y reafirmó su pleno compromiso con la década de acción y resultados en favor del desarrollo sostenible,

Reconociendo el papel del Comité de Expertos en Administración Pública en la prestación de asesoramiento sobre políticas y orientación programática al Consejo Económico y Social en cuestiones de gobernanza y administración pública, y la pertinencia de la labor del Comité para la implementación y el seguimiento de la Agenda 2030,

1. *Toma nota* del informe del Comité de Expertos en Administración Pública sobre su 22º período de sesiones³, y expresa su reconocimiento por la labor realizada por el Comité en lo relativo a la transformación urgente de las instituciones en pro de un mundo más verde, más inclusivo y más resiliente en un momento de múltiples crisis, de manera armonizada con el tema de 2023 del Consejo Económico y Social y del foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible;

2. *Invita* al Comité a que siga situando la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible⁴ en el centro de su labor y a que siga asesorando al Consejo sobre la forma en que las administraciones públicas pueden apoyar la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el examen de los progresos realizados a ese respecto;

3. *Acoge con beneplácito* la contribución del Comité al foro político de alto nivel, y reafirma que el principio de no dejar a nadie atrás debe ser un principio básico de la administración pública;

Transformar con urgencia las instituciones para un mundo más verde, más inclusivo y más resiliente en un momento de múltiples crisis

4. *Reconoce* la importancia de los enfoques pangubernamentales y pansociales para el desarrollo sostenible y para no dejar a nadie atrás, y alienta a los Gobiernos a trabajar juntos en interés de todos los países para fortalecer las instituciones públicas, a fin de estimular y guiar la recuperación de la pandemia de COVID-19 y estar mejor preparados para gestionar posibles crisis económicas, sociales y ambientales en el futuro;

³ Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 2023, suplemento núm. 24 (E/2023/44).

⁴ Resolución 70/1 de la Asamblea General.

5. *Pide* que se redoblen esfuerzos para apoyar los intercambios nacionales e internacionales entre pares y el aprendizaje entre pares sobre la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por ejemplo, mediante la cooperación con las redes internacionales existentes;

6. *Expresa preocupación* por el hecho de que, mientras los Gobiernos hacen frente a una acumulación de crisis simultáneas, se preste poca atención relativa a la reflexión a largo plazo, la gestión de riesgos, el uso de los mejores conocimientos, la participación de los interesados, la promoción de una mentalidad de colaboración y el uso de mecanismos de gestión de las finanzas públicas para subsanar los déficits de financiación, e insta a los Gobiernos a que aborden de manera holística los complejos problemas subyacentes a las crisis, como el cambio climático, asegurando que la gestión de las crisis no vaya en detrimento de la implementación sostenida de los Objetivos de Desarrollo Sostenible;

7. *Reconoce* que para lograr el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de la resiliencia es preciso adoptar una perspectiva a largo plazo en la formulación de políticas públicas y la construcción institucional en todos los niveles, sobre la base de una gobernanza eficaz para el desarrollo sostenible y un firme compromiso con la promoción de sociedades pacíficas, justas e inclusivas, y alienta a los Gobiernos a que integren las reflexiones sobre una visión de la sociedad a largo plazo en sus procesos de planificación, seguimiento y presentación de informes sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en sus exámenes nacionales voluntarios de los progresos realizados en el camino hacia 2030;

8. *Reconoce también* que para acelerar el cumplimiento de la Agenda 2030 en todos los niveles se precisan soluciones más integradas con el fin de alcanzar la visión y los Objetivos de la Agenda 2030, así como Estados más capaces en todos los niveles, y alienta a los países a que conciban y apliquen estrategias nacionales integradas de construcción institucional que aborden las importantes carencias de capacidad a nivel de todo el gobierno;

9. *Expresa preocupación* por la limitada capacidad de prever los diversos desafíos derivados de las múltiples crisis en muchos países y de prepararse para ellos, y pide una rápida mejora de la función de gestión de riesgos gubernamental y su integración en los mecanismos de coordinación relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible al más alto nivel;

10. *Reitera su preocupación* por el hecho de que en muchos países no se valora al medio ambiente lo suficiente e insta a los Gobiernos a que creen capacidad en materia de contabilidad del capital natural en el sector público, basándose en el Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica, a que refuercen la obligación que tienen las instituciones públicas de rendir cuentas en materia de protección del medio ambiente incluyendo en las evaluaciones periódicas de rendimiento una evaluación del estado de los recursos naturales bajo su jurisdicción y a que incorporen los nuevos métodos de valoración del capital natural en las normas de contabilidad de los sectores público y privado;

11. *Recuerda* la necesidad de fortalecer la respuesta mundial al cambio climático aumentando la capacidad de los países para adaptarse a sus efectos adversos, fomentar la resiliencia, acelerar el cumplimiento pleno de todos los Objetivos y metas de la Agenda 2030 e integrar las medidas relativas al cambio climático en las políticas, las estrategias y la planificación nacionales, pide que se apliquen enfoques creativos para atender las necesidades urgentes de las autoridades subnacionales de ampliar el acceso a la financiación climática, y alienta a las organizaciones internacionales y mecanismos de financiación pertinentes a que den prioridad a la capacitación y la asistencia destinadas a los países en desarrollo para

mejorar sus competencias en materia de análisis de datos y formulación de proyectos climáticos que atraigan inversiones;

12. *Reafirma* la necesidad de introducir mejoras pragmáticas y constantes en la capacidad de gobernanza nacional y subnacional para implementar la Agenda 2030 y otros acuerdos internacionales, y alienta a que en todos los niveles de gobierno se apliquen los principios de gobernanza eficaz para el desarrollo sostenible⁵, que refrendó en su resolución 2018/12, de 2 de julio de 2018, a todas las instituciones públicas y en apoyo de la consecución de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, teniendo en cuenta las diferentes estructuras de gobernanza, las realidades nacionales y subnacionales, las capacidades y los niveles de desarrollo y respetando las políticas y prioridades nacionales;

13. *Alienta* al Comité a que siga determinando y revisando las directrices y las experiencias técnicas para poner en práctica los principios, a nivel nacional y subnacional, incluso desde perspectivas sectoriales, y a que siga recabando la participación de las organizaciones de las Naciones Unidas, las organizaciones regionales y las comunidades profesionales y académicas pertinentes a este respecto, de manera inclusiva, junto con todos los interesados pertinentes;

14. *Acoge con beneplácito* la iniciativa del Mecanismo Africano de Evaluación entre Pares de la Unión Africana de promover la aplicación de los principios entre sus Estados miembros, en colaboración con el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Secretaría, y alienta a otros mecanismos regionales, como los asociados a las comisiones regionales de las Naciones Unidas, a que desarrollen y pongan en práctica iniciativas similares que se ajusten a sus mandatos y procesos respectivos;

15. *Observa* los nuevos esfuerzos del Comité por asociar un conjunto convenido de indicadores mundiales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a cada uno de los principios, con miras a contribuir a fortalecer la base analítica para evaluar los efectos de las políticas de reforma en la construcción a todos los niveles de instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas;

16. *Alienta* a que en todos los niveles de gobierno se intensifiquen los esfuerzos por promover la participación equitativa y significativa de todos los interesados, incluidos los más pobres y vulnerables y quienes son objeto de discriminación, en los asuntos que les afectan directamente y a que se apliquen modelos de participación basados en enfoques pangubernamentales y pansociales que no dejen a nadie atrás;

17. *Alienta también* a los Gobiernos, especialmente frente al aumento de la presión presupuestaria, a que aceleren las medidas de aumento de la transparencia y la participación igualitaria y supervisión en los procesos de presupuestación y establezcan marcos transparentes de adquisiciones públicas como herramienta estratégica para apuntalar el desarrollo sostenible y poner freno a las prácticas corruptas, a que refuercen la credibilidad presupuestaria y a que integren el compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los procesos presupuestarios y financieros nacionales y subnacionales adoptando prácticas de vigilancia y presentación de informes sobre el uso de los recursos financieros públicos en apoyo de los Objetivos, como la reorganización de los presupuestos por programas y actividades y el registro y seguimiento de las contribuciones presupuestarias a cada Objetivo;

⁵ Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 2018, suplemento núm. 24 (E/2018/44), cap. III, secc. B, párr. 31.

18. *Reconoce* que la creación de instituciones resilientes exige formas de trabajo más creativas, flexibles e integradas que se centren en las necesidades de las personas, así como un acervo adecuado de competencias, capacidades y recursos, y alienta a los Gobiernos a seguir promoviendo la profesionalización de la fuerza de trabajo del sector público, a invertir en aptitudes digitales, a actualizar los marcos de competencias para la implementación de la Agenda 2030, a solucionar las desigualdades en la fuerza de trabajo del sector público, así como a adoptar medidas para enfrentar las desigualdades sociales en el diseño y la prestación de servicios públicos;

19. *Reconoce* que existe una estrecha relación entre el cambio climático, el impacto ambiental y los conflictos, pide que se preste más atención a los problemas ambientales subyacentes en la consolidación de la paz y la promoción de una gobernanza eficaz por el desarrollo sostenible en los países frágiles y afectados por conflictos, y espera con interés que el Comité siga contribuyendo a la labor de la Comisión de Consolidación de la Paz;

20. *Reitera* que la pandemia de COVID-19 ha acelerado la transición digital y ha puesto de manifiesto las debilidades tecnológicas de las administraciones públicas, al tiempo que ha agravado las desigualdades causadas por las brechas digitales, y alienta a los Gobiernos a gestionar la digitalización de los servicios públicos de forma inclusiva, justa, ética y centrada en las personas, acelerando al mismo tiempo los esfuerzos para reducir las brechas digitales, entre otras cosas, mediante modelos híbridos de prestación de servicios públicos;

21. *Observa* las crecientes solicitudes de asistencia para la puesta en práctica de los principios de gobernanza eficaz para el desarrollo sostenible y la insistencia del Comité en la necesidad de reforzar su secretaría para que pueda responder eficazmente;

Seguimiento

22. *Solicita* al Comité que en su 23^{er} período de sesiones, que se celebrará del 15 al 19 de abril de 2024, examine el tema del período de sesiones de 2024 del Consejo y del foro político de alto nivel de 2024 y formule recomendaciones al respecto, y que contribuya al examen de la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, prestando especial atención al carácter transversal de todos los Objetivos;

23. *Invita* al Comité a que continúe asesorando sobre los enfoques y prácticas relativos a las instituciones, las políticas y los arreglos para promover la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, teniendo presente que las situaciones y los contextos específicos de los países varían considerablemente, y a que asesore sobre los medios de lograr que las instituciones sean eficaces, responsables e inclusivas;

24. *Solicita* al Secretario General que tenga plenamente en cuenta la presente resolución en la labor de la Organización, entre otras cosas, al abordar las deficiencias en la investigación y el análisis y al responder a las necesidades de los Estados Miembros en materia de desarrollo de la capacidad para crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles con miras a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible;

25. *Solicita también* al Secretario General que siga promoviendo y apoyando la innovación y la excelencia en la administración pública para el desarrollo sostenible mediante los Premios de Administración Pública de las Naciones Unidas;

26. *Solicita además* al Secretario General que informe sobre la aplicación y el seguimiento de la presente resolución mediante los métodos de trabajo establecidos por el Comité.

B. Proyecto de decisión cuya aprobación se recomienda al Consejo Económico y Social

2. Teniendo presente el tema del período de sesiones de 2024 del Consejo Económico y Social y del foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible, el Comité de Expertos en Administración Pública recomienda que el Consejo examine y apruebe el siguiente proyecto de decisión:

Fechas y programa provisional del 23^{er} período de sesiones del Comité de Expertos en Administración Pública

El Consejo Económico y Social:

a) Decide que el 23^{er} período de sesiones del Comité de Expertos en Administración Pública se celebrará en la Sede de las Naciones Unidas del 15 al 19 de abril de 2024;

b) Aprueba el programa provisional del 23^{er} período de sesiones del Comité, que figura a continuación:

1. Elección de la Mesa.
2. Aprobación del programa y otras cuestiones de organización.
3. Aspectos institucionales del tema del período de sesiones de 2024 del Consejo Económico y Social y del foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible de 2024.
4. Intercambio entre pares con los países que realizan exámenes nacionales voluntarios y las ciudades que realizan exámenes locales voluntarios sobre experiencias y prácticas prometedoras en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 16 y 17.
5. Instituciones, acción climática y medio ambiente.
6. Principios de gobernanza eficaz para el desarrollo sostenible.
7. Asuntos relativos a la fuerza de trabajo del sector público.
8. Gestión de las finanzas públicas.
9. Gobierno digital.
10. Construcción institucional en zonas frágiles y afectadas por conflictos.
11. Consulta específica con observadores.
12. Programa provisional del 24^o período de sesiones del Comité.
13. Aprobación del informe del Comité sobre su 23^{er} período de sesiones.

c) Decide que la documentación pertinente al programa provisional seguirá preparándose conforme a los métodos de trabajo establecidos del Comité.

C. Contribución del Comité al foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible

3. El Comité desea señalar a la atención del Consejo Económico y Social su contribución al examen temático del foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible de 2023, relativo a la transformación urgente de las instituciones en pro de un mundo más verde, más inclusivo y más resiliente en un momento de múltiples crisis, que se transmitió a la Presidencia del Consejo, en su calidad de Presidencia del foro político de alto nivel, el 1 de marzo de 2023. En su 22º período de sesiones, el Comité examinó también el tema de 2023 desde la perspectiva de la gobernanza y la administración pública y transmitió una contribución revisada el 6 de abril de 2023⁶.

4. Uno de los principales mensajes transmitidos por el Comité fue que la rapidez y la eficacia, si bien eran esenciales para responder a las crisis, no eran suficientes para lograr el desarrollo sostenible. En momentos en que los Gobiernos trataban de lidiar con la acumulación de crisis simultáneas, la gobernanza de las crisis se había convertido en parte de la “nueva normalidad”, lo que se traducía en una falta de atención relativa a seis ámbitos: la reflexión a largo plazo; la gestión de riesgos; el uso de los mejores conocimientos disponibles; la participación de los interesados; la promoción de una mentalidad de colaboración entre los trabajadores del sector público; y el aprovechamiento de los mecanismos de gestión de las finanzas públicas para subsanar los déficits de financiación.

5. Además, los Gobiernos nacionales deberían empoderar a los gobiernos subnacionales para acelerar la implementación de los Objetivos. En ese sentido, la gobernanza multinivel podría ser muy beneficiosa. Redundaba en interés de los Gobiernos nacionales alentar a los gobiernos subnacionales a realizar exámenes locales voluntarios periódicos y acelerar la acción para no dejar a nadie atrás, y con ese fin apoyar la formulación de políticas que tuvieran en cuenta las necesidades y aspiraciones de todos los segmentos de la sociedad, incluidos los más pobres y vulnerables y los que eran objeto de discriminación.

6. Dado que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible era un marco a mediano plazo y que el desarrollo sostenible requería una perspectiva a largo plazo en la formulación de políticas públicas, se debería alentar a los países a integrar las reflexiones sobre una visión de la sociedad en 2050 en la planificación, el seguimiento y la presentación de informes en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sin dejar de centrarse en el pleno cumplimiento de los Objetivos para 2030.

7. El compromiso de reforzar las instituciones para lograr soluciones más integradas con el fin de hacer realidad la visión de la Agenda 2030 y los Objetivos seguía siendo sumamente pertinente. Acelerar y profundizar la integración institucional mediante enfoques pangubernamentales y pansociales podría promover el pensamiento sistémico para generar cambios transformadores en la gobernanza y las políticas públicas. Para superar los retos que implicaba transformar las instituciones en pos de un mundo más verde, más inclusivo y más resiliente había que intensificar los esfuerzos encaminados a fomentar Estados más capaces a todos los niveles y en todas las esferas de acción gubernamental pertinentes para los Objetivos.

8. La comunicación y el uso eficaces de datos y pruebas fiables eran fundamentales para promover un enfoque pansocial en la consecución del desarrollo sostenible. Cabría justificar mejor la conexión entre las pruebas y la obtención de mejores resultados sociales y económicos, teniendo en cuenta también la manera en que se

⁶ Véase <https://hlpf.un.org/sites/default/files/vnrs/2023/HLPF%202023%20Inputs%20CEPA.pdf>.

comunicaba y utilizaba la información, por ejemplo, convirtiendo las ideas y las pruebas en cuestiones que fueran de interés para los distintos segmentos de la sociedad.

9. Por último, el Comité entabló un intercambio con los cuatro países que realizaron exámenes nacionales voluntarios (Arabia Saudita, Guyana, Malasia y Rwanda) y las dos ciudades que realizaron exámenes locales voluntarios (Barcelona (España) y Buenos Aires) con objeto de promover la interacción directa sobre los aspectos institucionales de los Objetivos 16 y 17. Cada uno de ellos presentó experiencias concretas para el debate.

10. Participó en el debate el Vicepresidente del Comité de Políticas de Desarrollo, Arunabha Ghosh, quien presentó la perspectiva del Comité de Expertos sobre la necesidad de una acción transformadora urgente, más rápida y más ambiciosa para alcanzar los Objetivos. La interacción entre los dos comités permitía hacer aportes al asesoramiento sobre políticas que prestaba el Comité de Expertos y contribuir en conjunto a reforzar la eficacia del sistema del Consejo Económico y Social.

11. En el capítulo III del presente informe figuran otras observaciones y conclusiones relativas al tema del foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible de 2023.

Capítulo II

Organización del período de sesiones

A. Trabajos del período de sesiones

12. El Comité de Expertos en Administración Pública, establecido por el Consejo Económico y Social en su resolución 2001/45, está integrado por 24 expertos nombrados a título personal por el Consejo a propuesta del Secretario General. El Comité celebró su 22º período de sesiones en la Sede de las Naciones Unidas (Nueva York) del 27 al 31 de marzo de 2023.

13. El Director de la División de Instituciones Públicas y Gobierno Digital, Juwang Zhu, declaró abierto el período de sesiones. La Presidenta del Consejo, Lachezara Stoeva, y la Subsecretaria General de Coordinación de Políticas y Asuntos Interinstitucionales, Maria Francesca Spatolisano, pronunciaron las palabras de apertura. El Comité examinó todos los temas del programa del 22º período de sesiones y concluyó su labor con la aprobación del proyecto de informe.

B. Asistencia

14. Los siguientes 17 miembros del Comité asistieron al período de sesiones en persona: Rolf Alter (Alemania), Linda Bilmes (Estados Unidos de América), Geraldine J. Fraser-Moleketi (Sudáfrica), Paul Jackson (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), Aigul Kosherbayeva (Kazajistán), Ronald U. Mendoza (Filipinas), Louis Meuleman (Países Bajos (Reino de los)), Lamia Moubayed Bissat (Líbano), Juraj Nemec (Eslovaquia), Alketa Peci (Brasil), Mauricio Rodas (Ecuador), Devon Rowe (Jamaica), Soonae Park (República de Corea), Carlos Santiso (Francia), Sherifa Fouad Sherif (Egipto), Aminata Touré (Senegal) y Najat Zarrouk (Marruecos). Los siguientes tres miembros del Comité participaron a distancia: Augustin Fosu (Ghana), Henry Sardaryan (Federación de Rusia) y Lan Xue (China). Tres miembros del Comité no pudieron participar en el período de sesiones: Yamini Aiyar (India), Katarina Ott (Croacia) y David Moinina Sengeh (Sierra Leona).

15. Las siguientes entidades del sistema de las Naciones Unidas estuvieron representadas en el período de sesiones: Organización Internacional del Trabajo, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Comisión Económica para África, Comisión Económica y Social para Asia Occidental y Universidad de las Naciones Unidas.

16. También asistieron observadores de organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y organizaciones conexas. Se invitó a los observadores a enviar declaraciones por escrito antes del período de sesiones, y la lista de los que asistieron al 22º período de sesiones puede consultarse en el sitio web del Comité.

C. Programa

17. El programa del 22º período de sesiones del Comité fue el siguiente:

1. Elección de la Mesa.
2. Aprobación del programa y otras cuestiones de organización.
3. Aspectos institucionales del tema de 2023 del Consejo Económico y Social y del foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible.

4. Intercambio entre pares con los países que realizan exámenes nacionales voluntarios y las ciudades que realizan exámenes locales voluntarios sobre experiencias y prácticas prometedoras en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 16 y 17.
5. Mecanismos institucionales para proporcionar apoyo económico, financiero y estructural a fin de enfrentar el cambio climático, reducir el uso de combustibles fósiles y proteger la biodiversidad.
6. Aplicación de los principios de gobernanza eficaz para el desarrollo sostenible a fin de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
7. Reinversión de la formación y el aprendizaje institucional de la fuerza de trabajo del sector público para lograr un cambio de mentalidad en ese sector.
8. Gestión de las finanzas públicas en situaciones de emergencia e implicaciones para la credibilidad presupuestaria.
9. Fomento de la innovación del sector público a través de la tecnología digital y medición de los efectos del gobierno digital.
10. Respuesta a los efectos del cambio climático en los esfuerzos de construcción institucional en los países frágiles y en los países que salen de un conflicto.
11. Programa provisional del 23^{er} período de sesiones del Comité.
12. Aprobación del informe del Comité sobre su 22^o período de sesiones.

D. Elección de la Mesa

18. La composición de la Mesa del Comité durante el 22^o período de sesiones fue la siguiente:

Presidencia:

Geraldine J. Fraser-Moleketi (Sudáfrica)

Vicepresidencias:

Louis Meuleman (Países Bajos (Reino de los))

Lamia Moubayed Bissat (Líbano)

Alketa Peci (Brasil)

Relatoría:

Rolf Alter (Alemania)

Capítulo III

Transformar con urgencia las instituciones para un mundo más verde, más inclusivo y más resiliente en un momento de múltiples crisis

A. Mecanismos institucionales para proporcionar apoyo económico, financiero y estructural a fin de enfrentar el cambio climático

Prestar mayor atención a la adaptación climática

19. El Comité examinó los mecanismos institucionales para proporcionar apoyo económico, financiero y estructural a fin de enfrentar el cambio climático. Señaló que la financiación de la adaptación al cambio climático iba a la zaga de la financiación de actividades para mitigar sus efectos, debido en parte a que resultaba difícil medir el rendimiento de las inversiones en adaptación. Se necesitaban soluciones y mecanismos de financiación innovadores para salvar esa diferencia a distintos niveles de gobierno y entre los múltiples interesados.

20. Los fondos para el clima, los bancos multilaterales de desarrollo y otros prestamistas podrían prestar más atención a la adaptación, por ejemplo proporcionando más financiación en forma de subvenciones, disponiendo reservas para pérdidas en préstamos y desarrollando proyectos híbridos de mitigación y adaptación. Los mecanismos regionales también podrían respaldar la financiación de la adaptación climática, incluso mediante el apoyo a la movilización de recursos nacionales y nuevos mecanismos fiscales. Con el fin de movilizar fondos podrían utilizarse herramientas como los canjes de deuda por adaptación climática y una tasa sobre las transacciones en los mercados voluntarios de carbono. Asimismo, podrían eliminarse las barreras institucionales que limitaban la aplicación de políticas que no requerían inversiones importantes, como la contratación pública ecológica.

21. Deberían tenerse en cuenta las necesidades de los países en desarrollo, cuyos recursos y espacio fiscal eran limitados y que habían contribuido poco al cambio climático, pero que a menudo tenían que gastar recursos considerables para gestionar sus efectos. Las mujeres, los jóvenes y los grupos vulnerables, que estaban entre los más afectados por el cambio climático, debían recibir el apoyo de los Gobiernos y ser empoderados en el contexto de la acción climática, entre otras cosas estableciendo mecanismos de protección social y de desembolso rápido (de emergencia) de fondos. Los fondos para el clima existentes deberían apoyar las respuestas e iniciativas comunitarias centradas en el género o en la juventud.

Realzar el papel de las alianzas público-privadas

22. Para abordar el cambio climático mediante una solución global había que hacer un llamamiento a aumentar los recursos tanto públicos como privados. Los Gobiernos deberían mejorar los marcos jurídicos de las alianzas público-privadas en todos los niveles estableciendo condiciones favorables y estructuras de otro tipo y colaborando con asociados sin fines de lucro para reducir los riesgos al mínimo y aprovechar una reserva más amplia de fondos privados. También deberían establecer la transparencia y la capacidad administrativa para garantizar la integridad y la eficacia de las alianzas público-privadas. Las organizaciones internacionales podrían apoyar el desarrollo de análisis comparativos y la definición de buenas prácticas de las alianzas público-privadas relacionadas con la acción climática.

23. Era necesario estudiar estrategias e instrumentos para atraer más financiación privada, en particular con el fin de reducir los riesgos de inversión y mejorar la disponibilidad de datos. Se debería incentivar a los inversionistas privados para que

utilizaran estrategias de inversión a más largo plazo y basadas en múltiples factores y estudiaran la posibilidad de usar mecanismos financieros innovadores, como los bonos verdes, bonos azules y minibonos, que podrían implantarse a escala e integrarse mejor. Disponer de mejores datos también podría ayudar a que el sector de los seguros se implicara en esos procesos.

Intensificar el uso de la contabilidad del capital natural

24. Los Gobiernos deberían reformar sus sistemas de estadística económica y contabilidad para dar cabida a una contabilidad del capital natural que sirviera para medir la contribución de los activos y servicios ecosistémicos a la economía, en términos físicos o monetarios. De esa manera, los Gobiernos también podrían cuantificar los beneficios de los proyectos climáticos para que resultaran más atractivos para los donantes. La normalización de las mediciones, el uso ampliado de tecnologías digitales y la difusión de las lecciones aprendidas podrían ayudar a que la contabilidad del capital natural ganara terreno. La contabilidad del capital natural debería promoverse también en las ciudades, los gobiernos subnacionales y el sector privado.

Facilitar el acceso de las ciudades y los gobiernos subnacionales a la financiación climática

25. El Comité sugirió revisar la arquitectura financiera internacional existente para que reflejara mejor el papel destacado de los gobiernos subnacionales en la acción para el clima. Sugirió asimismo que, para que las ciudades y los gobiernos subnacionales pudieran acceder a la financiación climática, cabría subsanar los obstáculos que lo impedían, como factores políticos e institucionales, limitaciones de datos y capacidad y requisitos de los donantes. Debería alentarse a los bancos multilaterales de desarrollo y otras instituciones financieras internacionales a que dieran prioridad a los proyectos de adaptación, concedieran un volumen de préstamos superior a los gobiernos subnacionales y desembolsaran los fondos de forma ágil y flexible.

26. Al mismo tiempo, con fondos y capacidades suficientes, las ciudades y los gobiernos subnacionales de otro tipo podrían transformar las ideas en proyectos financiables, actualizar los marcos de políticas, incorporar el cambio climático en la labor de planificación urbana, preparar planes de financiación climática y estrategias de inversión armonizadas con las políticas climáticas nacionales y mejorar la estabilidad y el rendimiento financieros.

27. Para mejorar aún más el acceso a la financiación climática, cabría facilitar la acreditación de las entidades subnacionales ante los fondos existentes y simplificar los requisitos de presentación de solicitudes. También podría considerarse la posibilidad de crear un fondo para la resiliencia urbana mundial y un banco de desarrollo para las ciudades verdes, vinculado al fondo de pérdidas y daños.

28. Los países donantes deberían cumplir íntegramente los compromisos adquiridos, incluida la financiación para aplicar los nuevos requisitos de préstamos o subvenciones, y utilizar prácticas contables justas. Podría estudiarse la posibilidad de nombrar un inspector general para los acuerdos climáticos con el fin de promover la transparencia y la previsibilidad, velar por el cumplimiento de los compromisos de financiación y realizar auditorías de las transferencias principales.

Aumentar las capacidades locales y nacionales para obtener financiación climática

29. Sería útil que las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y otras organizaciones internacionales dieran prioridad a la formación y la asistencia destinadas a los países en desarrollo para mejorar sus competencias en materia de análisis de datos y formulación de proyectos climáticos que atrajeran inversiones, definiendo y reduciendo al mínimo los riesgos financieros y de proyectos concretos, gestionando posibles concesiones y fomentando la inclusividad. También podría prestarse apoyo de ese tipo a los funcionarios de los gobiernos municipales y gobiernos subnacionales de otro tipo, en particular en los países en desarrollo.

30. Por otra parte, se presentaba una oportunidad de incorporar la financiación climática en los programas de desarrollo de la capacidad y los planes de estudios del funcionariado. Las asociaciones nacionales de gobiernos subnacionales y locales podrían desempeñar un papel importante en la creación de capacidad y la organización de actividades de aprendizaje entre pares.

31. Los mecanismos de gobernanza a múltiples niveles encargados de reunir y difundir datos podrían asegurar el acceso de los gobiernos municipales a información que les permitiera tomar decisiones sobre el urbanismo y el desarrollo inteligentes en función del clima.

Colaboración entre múltiples interesados para llegar a soluciones más integradas

32. El desarrollo sostenible y la acción climática eficaz exigían un enfoque integrado y coherente y responsabilidades compartidas entre los interesados, basadas en la transparencia y la rendición de cuentas. Las ciudades también deberían evitar un enfoque compartimentado y centrarse de forma inclusiva en los aspectos sociales, ambientales y económicos del desarrollo sostenible.

33. Para garantizar su participación efectiva, los gobiernos locales debían estar empoderados, y sus funciones y responsabilidades institucionales en materia de acción climática debían estar definidas claramente. La colaboración entre múltiples interesados también podría ser útil para afrontar los costos que supone la transformación ecológica.

B. Aplicación de los principios de gobernanza eficaz para el desarrollo sostenible con el fin de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Promover el principio de participación

34. El Comité señaló que la participación pública era la piedra angular de una gobernanza eficaz para el desarrollo sostenible y era intrínseca a la visión común de la Agenda 2030. Los países deberían elaborar sus propios modelos de participación pública para no dejar a nadie atrás, prestando especial atención a las mujeres, los jóvenes y los grupos vulnerables, cuyas opiniones tal vez no se escucharían de otro modo en los procesos políticos, incluso aunque sus intereses se vieran afectados directamente.

35. Los Gobiernos deberían adoptar enfoques pangubernamentales y pansociales, que comprendieran un sistema de gobernanza que funcionara verdaderamente en múltiples niveles, diera cabida a múltiples interesados y pusiera a las personas en el centro del desarrollo. Deberían crear un entorno propicio para la participación, y con ese fin proteger el derecho de participación y el espacio cívico. La voluntad política y los medios de implementación eran algunos de los elementos necesarios para crear ese entorno propicio.

Institucionalizar la participación en la administración gubernamental

36. Los medios de participación a menudo se concebían en respuesta a una necesidad inmediata o específica o para satisfacer necesidades especiales a pesar de décadas de estudio y experiencia, incluso entre los organismos operacionales que apoyaban el cumplimiento de los objetivos nacionales de desarrollo sobre el terreno. Si bien cabía reconocer que habían surgido nuevas oportunidades, especialmente en el ámbito digital, existía un gran acervo de conocimientos que podían extraerse de todos los contextos de desarrollo. La producción de servicios junto con los ciudadanos como asociados y no como sujetos, la presupuestación participativa y la presupuestación con perspectiva de género eran algunas esferas de actividad que estaban bien desarrolladas (véase también el cap. III.D).

37. Se consideró que establecer arreglos normativos e institucionales era esencial para reforzar la calidad de la participación, tanto en línea como en otros entornos, así como para fomentar la legitimidad de las políticas públicas basadas en la inclusión de todos los interesados pertinentes y para promover la rendición de cuentas de los funcionarios públicos sobre la participación significativa. Esta labor podría aumentar la identificación con los Objetivos y apoyar la implementación, el seguimiento y el examen eficaces a todos los niveles. El Comité observó que la falta de participación también tenía un costo, por ejemplo, cuando se rechazaban los resultados de los exámenes de expertos en los que no se había contado con los interesados, incluso aunque se hubiera llegado a las mismas conclusiones en otro foro a través de un proceso inclusivo.

38. Resultaba crucial que los Gobiernos prestaran atención al cambio de mentalidad, actitudes y comportamientos de los funcionarios públicos, que podrían mostrarse reacios a usar más los procesos participativos y ampliar su alcance.

39. Si se lograra que los Gobiernos dieran y recibieran información sobre los procesos participativos realizados o previstos, ello podría ayudar a fomentar la confianza y la participación. Esa labor también podría ayudar a los Gobiernos a velar por que los mecanismos, procesos y herramientas de participación pública, incluidas las plataformas digitales, estuvieran bien diseñados, aplicados y supervisados. Deberían tenerse en cuenta las necesidades específicas de creación de capacidad de las autoridades subnacionales, dadas las aspiraciones recogidas en la Agenda 2030 y las persistentes dificultades asociadas a la limitada capacidad administrativa a nivel local. Se consideró que la relativa falta de atención prestada a la participación de los interesados en los informes sobre los exámenes locales voluntarios podría ser preocupante a la hora de localizar los Objetivos.

Fortalecer el entorno propicio para la participación

40. Los Gobiernos deberían solventar urgentemente los obstáculos a la participación pública, como la falta de confianza de los ciudadanos en el Gobierno, una comprensión limitada de los derechos individuales y del deber cívico y la poca capacidad de los actores de la sociedad civil para seguir de cerca la aplicación de las políticas, teniendo en cuenta al mismo tiempo el contexto nacional.

41. Debería adoptarse un enfoque holístico, y los funcionarios públicos y actores no estatales deberían ser empoderados y recibir capacitación a través de medidas de educación y creación de capacidad, incluida la prestación de capacitación adecuada para que conozcan mejor sus derechos, deberes y obligaciones, lo que podría fortalecer su sentido de pertenencia y su implicación. Se señaló que, por su cercanía a los ciudadanos, los gobiernos subnacionales estaban en condiciones de aprovechar bien las estrategias de participación. Se señaló también que las organizaciones de la sociedad civil podrían optar por reforzar sus propios enfoques participativos, sin esperar a ser invitadas a expresar sus preocupaciones.

Indicadores de una gobernanza eficaz para el desarrollo sostenible

42. El Comité observó que, pese a haberse logrado algunos avances en el seguimiento y la medición del progreso hacia los Objetivos, las lagunas en los datos seguían siendo un obstáculo importante en los procesos de seguimiento y examen, por ejemplo debido a las series cronológicas incompletas, los problemas de puntualidad y granularidad de los datos y una cobertura incompleta. Además, el Comité indicó que algunos procedimientos para generar datos a partir de indicadores cualitativos no eran estadísticamente relevantes.

43. Aunque se resolvieran algunas de las principales carencias de datos en el marco de indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible acordado a nivel mundial, el marco seguiría siendo insuficiente para evaluar la calidad de la gobernanza y sus efectos en la implementación de la Agenda 2030. La mayoría de los indicadores se refería a los objetivos de política más que a la forma de alcanzarlos.

Indicadores para el establecimiento de prioridades

44. A la hora de abordar esas dificultades, cabría distinguir entre indicadores para el establecimiento de prioridades e indicadores con fines analíticos. Algunos indicadores de alto nivel eran a menudo los más útiles para establecer prioridades, por ejemplo cuando había que elegir entre invertir en carreteras o en escuelas. En la toma de decisiones de ese tipo sería primordial considerar los derechos humanos.

45. El Comité observó asimismo que los índices de gobernanza que englobaban diversos objetivos, instrumentos y estructuras institucionales, utilizados a veces por los responsables de adoptar decisiones, podían ser objeto de crítica por su complejidad, falta de transparencia metodológica y exclusión de las evaluaciones cualitativas.

Indicadores para el análisis de políticas

46. En cuanto a los indicadores para el análisis de políticas, el Comité recalcó que, pese a la relación causal entre los aspectos de gobernanza de los Objetivos 16 y 17 y la consecución de todos los Objetivos, a menudo se preferían los indicadores de políticas a los de gobernanza.

47. Sería factible estudiar las interconexiones entre los elementos de una gobernanza eficaz y todos los Objetivos mediante análisis de redes en múltiples niveles apoyados por la inteligencia artificial. Un paso importante sería definir con precisión indicadores que reflejaran los principios de gobernanza, aprovechando el trabajo realizado por entidades activas en ese ámbito. La elaboración de una metodología consensuada para el indicador 17.14.1 de los Objetivos, relativo a la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible, ilustraba los avances recientes en ese sentido.

El camino a seguir

48. El Comité convino en que unos indicadores que abarcaran todos los principios constituirían un punto de partida útil para la labor futura. Los indicadores deberían tener un nivel de detalle suficiente para poder captar la calidad de la respuesta de un Gobierno a los Objetivos a nivel nacional y subnacional y afrontar las carencias analíticas en los procesos de examen, refiriéndose a la vez a la forma en que las diferentes dimensiones de la construcción institucional podrían reforzarse o debilitarse mutuamente en los diversos contextos nacionales.

49. Los exámenes nacionales voluntarios eran solo una parte de la estructura de examen de los Objetivos. Los principios e indicadores de gobernanza podrían

abordarse como un hilo conductor que vincularía el cumplimiento de todos los Objetivos tanto dentro como fuera de los procesos de examen formales. Los procesos incluían debates sobre los exámenes nacionales voluntarios celebrados en el marco del foro político de alto nivel, exámenes temáticos de los Objetivos en el foro político de alto nivel, mecanismos de examen a nivel regional y procesos nacionales de examen distintos de los exámenes nacionales voluntarios.

50. De cara al futuro, sería indispensable establecer una mayor colaboración con, por ejemplo, el Mecanismo Africano de Evaluación entre Pares, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para garantizar la pertinencia y la legitimidad. El Comité subrayó que, en muchos aspectos, la iniciativa en curso del Mecanismo Africano de Evaluación entre Pares para promover la aplicación de los principios entre sus Estados miembros, en colaboración con el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Secretaría, seguía siendo muy productiva. Se podría alentar a otros mecanismos regionales, como los asociados a las comisiones regionales, a desarrollar y poner en práctica iniciativas similares en consonancia con sus propios mandatos y procesos.

C. Reinversión de la formación y el aprendizaje institucional de la fuerza de trabajo del sector público para lograr un cambio de mentalidad en el sector

51. El Comité observó que para mejorar la preparación y la resiliencia en la gestión de las crisis actuales y futuras se necesitaban instituciones públicas ágiles y basadas en datos y conocimientos. Esas instituciones debían contar con un nuevo conjunto de aptitudes y sus funcionarios, incluidos los cargos electos y los cargos políticos, debían tener una mentalidad democrática y centrada en los ciudadanos.

52. Debería darse prioridad a un enfoque holístico para cambiar la mentalidad de los funcionarios y los dirigentes políticos a fin de ajustarla a los principios y valores de la Agenda 2030 y a los 11 principios de gobernanza eficaz para el desarrollo sostenible. Ello contribuiría también a poner de relieve la cultura, la ética y los valores que caracterizaban el papel del funcionariado.

Necesidad de hacer un examen sistemático de las actividades de creación de capacidad en el sector público

53. La escasez de capacidades y aptitudes entre los funcionarios, incluidos los cargos elegidos y los cargos políticos, era una de las principales deficiencias que obstaculizaban las iniciativas para la consecución de los Objetivos. Sin embargo, la externalización de actividades básicas del sector público a agentes externos solo debía producirse en ámbitos en los que pudieran obtenerse ganancias en eficiencia sin poner en peligro la rendición de cuentas y otros objetivos.

54. Deberían examinarse las actividades de creación de capacidad del sector público de forma sistemática y exhaustiva, especialmente en los países en los que la prestación de servicios públicos seguía siendo ineficaz. Debería prestarse especial atención a la adaptación tecnológica, el acceso y el derecho a la formación, los cursos prescritos, la acreditación de los cursos, la relación entre la formación y la educación impartidas y las políticas y los procedimientos de clasificación de puestos, remuneración, contratación y selección, evaluación del desempeño y promoción.

55. La creación de instituciones sólidas a través de la formación debía basarse en la evaluación, el análisis y la determinación de prioridades detalladas de las necesidades individuales e institucionales. El análisis de las necesidades institucionales debía centrarse en la mejora de la prestación de servicios, la necesidad de estructuras

racionalizadas y rentables y de fortalecimiento institucional, así como en el fomento de una mayor rendición de cuentas interna y externa. La evaluación de las necesidades individuales debía facilitar un sistema de planes de desarrollo personal para todos los empleados y determinar las formas adecuadas de perfeccionamiento del personal. Los programas de formación debían concebirse de manera que tuvieran en cuenta las cuestiones de género y fueran inclusivos.

56. Entre los resultados a largo plazo de una formación eficaz deberían figurar el cambio de comportamiento y una mejora del rendimiento laboral de los funcionarios, lo que a su vez podría dar lugar a un cambio de mentalidad en todos los niveles. La formación y la educación en el sector público podían ser costosas, y la utilización de los recursos conexos debía justificarse y controlarse. Se recomendó el uso de criterios específicos e indicadores clave del desempeño. Además, las actividades de formación deberían evaluarse en función de sus efectos con el objetivo de promover las que tuvieran mayores efectos y obtener una mayor rentabilidad sobre los fondos invertidos. La formación debería ir acompañada de medidas estructurales y sistémicas para asegurar la retención y los efectos del aprendizaje.

57. Para garantizar la eficacia de las estrategias de formación y desarrollo de la capacidad, se necesitaría asignar recursos de manera adecuada y sostenible, incluso a nivel subnacional, así como adaptar las buenas prácticas de todas partes del mundo.

Competencias de los funcionarios y ciencias del comportamiento

58. Sería necesario que los funcionarios, incluidos los cargos elegidos y los cargos políticos desarrollaran nuevas aptitudes y competencias para desenvolverse con eficacia en la era digital. A la hora de elaborar formación basada en la tecnología, había que tener en cuenta la brecha digital para garantizar que nadie se quedara atrás.

59. La difusión de información errónea y desinformación, la proliferación de plataformas digitales y la creciente polarización política exigían una respuesta activa por parte de los funcionarios que participaban en la elaboración de estrategias de comunicación pública destinadas a informar e inspirar a los ciudadanos para que adoptasen medidas positivas en aras de formar sociedades más democráticas, sostenibles y ecológicas. La pandemia de COVID-19 resaltó el papel crucial de la comunicación inclusiva, que tendía puentes entre grupos étnica y lingüísticamente diversos y salvaba las brechas de alfabetización digital entre generaciones y poblaciones urbanas y rurales. La pandemia también demostró que el uso estratégico de las ciencias del comportamiento podía ser eficaz para fomentar el cumplimiento y la adopción de políticas, sobre todo en entornos gubernamentales muy descentralizados.

60. Ante las múltiples crisis, la transformación urgente de las instituciones públicas para lograr un mundo más verde, inclusivo y resiliente exigía una fuerza de trabajo del sector público capaz de fomentar la resiliencia. Esa fuerza de trabajo podía formarse si los encargados de formular políticas crearan capacidades de previsión estratégica, otorgaran un papel más destacado a los dirigentes y funcionarios dispuestos a desafiar al sistema e innovar desde dentro redefiniendo las normas y mejorándolas desde el punto de vista estratégico (los llamados *hackers* burocráticos), y usaran más las herramientas de formulación de políticas más innovadoras que fueran más allá de los enfoques descendentes.

Implicación de la juventud

61. Deberían tenerse en cuenta los problemas y las necesidades de los jóvenes, que se veían afectados especialmente por las múltiples crisis, y aumentar su participación en la formulación de políticas y en las instituciones públicas, pues esa implicación

sería clave para alcanzar los Objetivos e impulsar reformas sistémicas a largo plazo. Podría reforzarse la capacidad administrativa del sector público para prestar servicios centrados en la juventud, recopilar datos para hacer un seguimiento de las desigualdades a las que se enfrentaban los jóvenes y fundamentar la adopción de decisiones e integrar el principio de equidad intergeneracional en la formulación de normas, la toma de decisiones sobre el gasto público y las consultas con las partes interesadas. Podrían utilizarse distintos métodos de participación significativa de los jóvenes, como el entretenimiento educativo y la ludificación.

62. Dada la falta de concienciación sobre el papel de los funcionarios y la falta de confianza en el público, había que promover el papel y el valor de la fuerza de trabajo del sector público y mostrar algunos de sus éxitos para atraer y retener a funcionarios jóvenes en todos los niveles, incluidos el local y el subnacional. También había que procurar que los jóvenes recibieran apoyo a lo largo de la carrera para que sus competencias (digitales) compensaran su falta de experiencia.

D. Gestión de las finanzas públicas en situaciones de emergencia e implicaciones para la credibilidad presupuestaria

Presupuestación para el cumplimiento de los Objetivos y frente a las situaciones de emergencia

63. El Comité señaló que la falta de avances en la consecución de los Objetivos exigía replantearse las prioridades de su integración en los procesos presupuestarios nacionales, y que también era necesario destinar créditos en los presupuestos para gastos de emergencia. Para hacer frente con mayor eficacia a los retos que planteaban las múltiples crisis en curso, era necesario reforzar la previsión y planificación de los ingresos y la gestión de las finanzas públicas, garantizando al mismo tiempo la rendición de cuentas, la transparencia y la participación pública.

64. Dado que el gasto público tenía repercusiones considerables en la consecución de los Objetivos y en la recuperación de la pandemia de COVID-19, los países debían destinar asignaciones presupuestarias en consecuencia y ejecutar los presupuestos según lo previsto. A estas alturas, deberían reducirse o eliminarse las transferencias de emergencia dirigidas a amortiguar el impacto social de la pandemia de COVID-19 y los subsidios sociales indiscriminados.

Coordinación presupuestaria y creación de capacidad

65. Deberían establecerse mecanismos que, en situaciones de emergencia, garantizaran la coordinación presupuestaria entre las distintas entidades y entre los distintos niveles de gobierno con el fin de contribuir a aumentar la eficiencia presupuestaria, el respeto de las normas fiscales nacionales y la armonización con el logro de los Objetivos.

66. Debería mejorarse la flexibilidad institucional en la estructura presupuestaria de los países, empezando por integrar más la capacidad de gestión del riesgo en la totalidad del ciclo presupuestario. Deberían evaluarse los pasivos contingentes al margen de su impacto financiero. Debería procurarse institucionalizar los procesos presupuestarios basados en los riesgos y las emergencias en consonancia con los principios de transparencia y participación.

67. Deberían utilizarse clasificaciones funcionales en todos los documentos presupuestarios para que se pudieran comparar las asignaciones y la ejecución por sector, así como clasificaciones administrativas para poder hacer un seguimiento del gasto público, especialmente en el nivel subnacional de gobierno.

68. Para mejorar la gestión de las finanzas públicas, había que aumentar la capacidad técnica y los conocimientos financieros y presupuestarios. Podrían adoptarse diversas medidas para reforzar la capacidad de los funcionarios en materia de transparencia fiscal, por ejemplo, mejorando su comprensión del papel de los distintos interesados y de las cuestiones de economía política.

Credibilidad presupuestaria

69. La credibilidad presupuestaria estaba relacionada con los principios de gobernanza eficaz. La falta de credibilidad presupuestaria que ya estaba presente en muchos países se había agravado aún más debido a las crisis recientes. Era necesario analizar las desviaciones presupuestarias para comprender sus causas y determinar los sectores más privados de financiación, a fin de evitar que repercutieran negativamente en la consecución de los Objetivos y asegurar que nadie se quedara atrás.

70. Aunque las crisis podían ocasionar gastos imprevistos y cambios presupuestarios, era importante que los Gobiernos ofrecieran, tanto a los órganos legislativos como a los ciudadanos, explicaciones pertinentes de los motivos de las desviaciones, las publicaran abiertamente y dieran detalles sobre las medidas previstas que fueran necesarias para volver a gastar conforme a los presupuestos y compensar la infrautilización anterior. La sociedad civil debería participar en los debates sobre la credibilidad presupuestaria y ayudar a encontrar posibles soluciones para garantizar la inclusión y la aceptación.

71. Algunos países habían avanzado en materia de credibilidad presupuestaria, por ejemplo, al mejorar los procesos básicos de gestión de las finanzas públicas de acuerdo con las normas internacionales vigentes, proteger los gastos básicos y mejorar los procesos posteriores a la presupuestación, como la presentación de informes, la contabilidad y la auditoría.

72. El manual sobre la manera en que las entidades fiscalizadoras superiores podrían arrojar luz sobre la credibilidad presupuestaria, preparado por la International Budget Partnership y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales y de próxima aparición, podría orientar a las entidades fiscalizadoras superiores para que se implicaran más en las cuestiones de credibilidad presupuestaria.

Disponibilidad de datos para fundamentar las decisiones presupuestarias

73. Al adoptar decisiones presupuestarias difíciles, los gobiernos deberían basarse en datos fiables, transparentes y exhaustivos, considerados imprescindibles para entender mejor las desviaciones presupuestarias. Los datos recopilados en relación con el indicador 16.6.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible deberían utilizarse para medir la credibilidad presupuestaria y dar a conocer los efectos de las desviaciones presupuestarias en sectores y grupos específicos y la necesidad de contar con una financiación presupuestaria sostenible y bien orientada a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

74. Se observó, sin embargo, que muchos informes gubernamentales seguían sin incluir detalles e información desglosada suficientes. Se necesitaba un marco jurídico adecuado para mejorar la calidad y disponibilidad de la información. La sociedad civil también podría aprovechar los datos para vigilar el proceso presupuestario y garantizar la rendición de cuentas.

Digitalización y gestión de las finanzas públicas

75. Deberían fomentarse las innovaciones digitales de ámbito gubernamental y el desarrollo de infraestructura pública digital esencial, como la identificación fiscal, la

gobernanza de los datos en la gestión de las finanzas públicas y el uso ampliado de los pagos digitales. Las herramientas digitales también podrían ayudar a determinar mejor los riesgos fiscales. Deberían gestionarse y vigilarse mejor las inversiones ambiciosas en la digitalización del sector público, especialmente a escala subnacional, para asegurar la credibilidad presupuestaria (véase también el cap. III.E).

Ayuda para el desarrollo

76. Se alentó a los donantes internacionales y las instituciones multilaterales a que cumplieran sus compromisos financieros de manera oportuna y transparente, incluso otorgando no solo préstamos, sino también subvenciones en función de las necesidades efectivas y teniendo en cuenta los gastos de funcionamiento y de mantenimiento a largo plazo.

77. Los países beneficiarios deberían evaluar sus necesidades y planificar de forma realista, desarrollar su capacidad presupuestaria y su preparación financiera para poder gestionar los fondos recibidos de forma transparente y responsable, preparar un plan de gestión de la deuda consolidado y centralizado y elaborar mediciones del desempeño. En época de crisis, esos países deberían fortalecer la planificación de la respuesta antes de que se agravara la crisis.

E. Fomento de la innovación del sector público a través de la tecnología digital y medición de los efectos del gobierno digital

Enfoques híbridos de la prestación de servicios públicos

78. El Comité reiteró que la pandemia de COVID-19 había acelerado aún más la digitalización del sector público. Al mismo tiempo, había puesto de relieve las ventajas de lograr un equilibrio armonioso entre la prestación de servicios públicos virtuales y presenciales y la comunicación en el ámbito político.

79. Ante las tendencias tecnológicas que surgían rápidamente y los riesgos asociados a ellas, deberían revisarse, modificarse o elaborarse normativas y políticas en materia de tecnología digital. Era importante desarrollar una reglamentación idónea, en la que se estableciera un equilibrio entre la regulación total y la autorregulación, entre los incentivos y las penalidades y otras formas de regulación inteligente. Podría considerarse la posibilidad de adoptar un enfoque basado en el ciclo de vida para regular las tecnologías. Se señaló también que no existía un enfoque único.

Subsanar los déficits de capacidad digital

80. Entre los funcionarios y los dirigentes políticos había una gama amplia de déficits de capacidad digital. Aunque no era necesario que fueran expertos en tecnologías digitales, para poder elaborar políticas eficaces importaba que entendieran las oportunidades y los riesgos que entrañaban esas tecnologías. Había que ampliar la capacidad reguladora del sector público para garantizar el uso óptimo de las nuevas tecnologías. Al mismo tiempo, sería útil dismantelar los silos institucionales y los obstáculos que entorpecían el uso de las competencias digitales de la fuerza de trabajo del sector público. El éxodo intelectual digital seguía siendo preocupante, especialmente en los países de ingreso mediano y bajo.

81. El Comité recomendó fomentar la alfabetización digital pública en todos los grupos de edad, incluidos los jóvenes. Los planes de estudios deberían incluir cursos no solo para adquirir conocimientos especializados sobre tecnología digital, sino también para entender la tecnología y sus repercusiones directas e indirectas, incluso

en lo tocante a la ética y los derechos humanos. Las escuelas de administración pública y los institutos de formación gubernamental estaban en condiciones de apoyar el aprendizaje digital continuo.

Examen de las estrategias digitales nacionales y las tecnologías de extremo a extremo

82. Las estrategias digitales nacionales deberían adoptar un enfoque holístico e integrado y centrarse en obtener resultados concretos, cerrar las brechas digitales y mejorar la vida y el bienestar. Las estrategias deberían ser idóneas y equilibrar las oportunidades y los riesgos, reforzando el enfoque centrado en las personas y el respeto de los derechos humanos. Era necesario seguir celebrando consultas e interactuando con la ciudadanía para conocer sus deseos y necesidades en relación con la prestación de servicios públicos digitales.

83. Las estrategias digitales nacionales deberían estar orientadas a fomentar el desarrollo y la compra de tecnologías y productos de software nacionales que mejoraran el empoderamiento digital de los Estados. Había que apoyar el desarrollo de tecnologías de extremo a extremo y acelerar su despliegue, dado su impacto en los cambios estructurales de la economía, la creación de nuevas industrias y empresas y el desarrollo de una producción y unos servicios de tecnología de la información y las comunicaciones tecnológicamente avanzados e innovadores. Los bienes públicos y las infraestructuras digitales podrían fomentar la inclusión digital, incluso a través de enfoques de último tramo para llegar a los más vulnerables.

84. La prestación eficaz de servicios digitales se veía afectada por la disponibilidad y gestión efectiva de los conjuntos de datos, incluidos los datos sobre y para los Objetivos. El Comité destacó la necesidad de acelerar la transferencia y el intercambio de tecnologías entre países, especialmente entre países desarrollados y en desarrollo.

Regulación de las criptomonedas

85. Las criptomonedas deberían estar reguladas debidamente, teniendo en cuenta las oportunidades y los riesgos conexos, y los países deberían redoblar sus esfuerzos en ese sentido. Seguía siendo esencial aumentar la seguridad de los sistemas de información y las redes de comunicación de las instituciones públicas. A ese respecto, seguía siendo prioritario reducir los riesgos de filtración y uso indebido de información y datos personales de los ciudadanos.

Fomentar la confianza digital, reducir las diferencias y respetar los derechos humanos

86. En el contexto de no dejar a nadie atrás, resultaba urgente y necesario salvar las brechas digitales y garantizar el acceso digital y una conectividad real, especialmente de quienes sufrían pobreza digital y quienes vivían en países en desarrollo y en zonas y regiones remotas y desatendidas (brecha rural-urbana). Era necesario hacer frente a los desafíos que planteaban circunstancias como los cortes de Internet, la falta de libertad de información y la falta de acceso asequible a dispositivos y contenidos digitales.

87. Aunque se digitalizaran algunos servicios públicos, era indispensable que la prestación de servicios públicos siguiera basándose en normas humanas y éticas. Las leyes y los derechos digitales, como el derecho al consentimiento y el derecho al olvido, podrían utilizarse para proteger y salvaguardar los derechos humanos fundamentales.

88. Para mantener la confianza del público, los Gobiernos deberían informar a la ciudadanía de las ventajas y el funcionamiento de las tecnologías digitales. Era

necesario, por ejemplo, explicar el uso de la inteligencia artificial en el sector público. El rápido avance de la inteligencia artificial exigía una regulación y un mayor análisis de sus repercusiones, especialmente en cuanto a sus consecuencias imprevistas y las cuestiones de privacidad, tomando como base la labor realizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y otras entidades que se ocupaban de cuestiones relacionadas con la ética y el uso de la inteligencia artificial. Era necesario hacer frente a la preocupante tendencia a la información errónea, la desinformación, el discurso de odio y las noticias falseadas. Además, para proteger a las personas, resultaba sumamente importante evitar el uso indebido de las tecnologías por parte de los Gobiernos (por ejemplo, mediante la censura y la vigilancia) y los agentes no gubernamentales (por ejemplo, mediante el fraude informático y el ciberrobo).

F. Respuesta a los efectos del cambio climático en los esfuerzos de construcción institucional en los países frágiles y en los países que salen de un conflicto

Cuestiones relacionadas con la consolidación de la paz ambiental

89. El Comité observó que había una relación estrecha entre el cambio climático, el impacto ambiental y los conflictos. Los países frágiles y afectados por conflictos estaban entre los que más sufrían los efectos del cambio climático, como el aumento de los desastres naturales y la subida del nivel del mar, que potenciaban factores de conflicto ya existentes, como la pobreza extrema y la falta de acceso a servicios básicos. Cabía señalar cuatro posibles vías por las que aumentaba el riesgo de conflicto como consecuencia directa del cambio climático: los medios de subsistencia; la migración; la conducta de los grupos armados; y la explotación por parte de las élites políticas. Las consecuencias del cambio climático y los riesgos de conflicto dependían del contexto local e interactuaban con factores sobre el terreno, produciendo resultados impredecibles.

90. Muchos conflictos eran impulsados o sostenidos por la degradación del medio ambiente o incluso, en algunos casos, la provocaban; por tanto, la resolución de conflictos y el desarrollo sostenible a largo plazo requerían una forma de consolidación de la paz ambiental. Había que reconocer el papel de las instituciones locales, tradicionales e informales en la gestión de los recursos naturales y su contribución a la consolidación de la paz ambiental.

Enfoques de la consolidación de la paz ambiental

91. El Comité observó que existían tres enfoques fundamentales para la consolidación de la paz ambiental basados en la seguridad, los medios de subsistencia y la política. El enfoque de la seguridad se centraba en las posibilidades que ofrecía la cooperación ambiental para reducir los conflictos por los recursos naturales y aumentar la estabilidad; el enfoque de los medios de subsistencia se centraba en las posibilidades que ofrecía la cooperación ambiental para mejorar el bienestar de las comunidades afectadas por conflictos; y el enfoque de las políticas se centraba en las posibilidades que ofrecía la cooperación ambiental para generar confianza y entendimiento entre las distintas partes.

92. Unas instituciones fuertes y una gobernanza eficaz sustentaban la seguridad física, el bienestar económico y las relaciones sociales de cooperación y apoyaban la estabilidad política y la confianza pública. Deberían evitarse los argumentos contradictorios que no reflejaran las realidades sobre el terreno, para impedir así que avivaran los conflictos.

Fortalecer la consolidación de la paz ambiental

93. El Comité sugirió mejorar los enfoques de la consolidación de la paz ambiental basados en las políticas mediante:

a) Un mejor análisis de las causas subyacentes y de los mecanismos gracias a los cuales los países que experimentaban el cambio climático y un mayor riesgo de conflicto podrían mejorar la programación y la presentación de informes para mitigar los riesgos de manera efectiva. Con información más precisa, los países también podrían diferenciar entre los objetivos a corto y largo plazo de las iniciativas institucionales de consolidación de la paz y apoyar la acción climática basada en pruebas;

b) El pensamiento coordinado en materia de políticas mediante un enfoque de consolidación de la paz ambiental que abarcara todo el sistema socioecológico, además de los problemas que trascendían las fronteras tradicionales de la gobernanza, como las fronteras locales y nacionales. Había que aumentar la transparencia y la rendición de cuentas, e implicar más al sector privado y a otros actores en la acción climática y en las actividades de consolidación de la paz ambiental para reforzar la cohesión y la confianza. Se señaló asimismo que en situaciones de consolidación de la paz podría ser útil elegir un problema tangible con el que pudieran identificarse los distintos grupos;

c) La adopción de un enfoque que tuviera en cuenta las cuestiones climáticas y permitiera reconocer que los efectos del cambio climático y las cuestiones relacionadas con los recursos naturales estaban en el centro de los conflictos y que los esfuerzos por superar esos retos eran un medio de combatir la injusticia subyacente. Al mismo tiempo, había que determinar las causas profundas de los conflictos y aumentar la inversión en prevención de conflictos para reducir al mínimo el riesgo de conflictos en el futuro;

d) En las actividades de consolidación de la paz ambiental, la atribución de una mayor importancia a las necesidades y los problemas de los grupos más vulnerables a los efectos del cambio climático y los conflictos, como las mujeres, los jóvenes y las poblaciones atrapadas (aquellas dispuestas a desplazarse pero que no podían hacerlo). Los gobiernos deberían prevenir la injusticia, garantizar el respeto de los derechos humanos y reforzar el estado de derecho en el ámbito del medio ambiente;

e) Ante la crisis climática actual, el aumento de la colaboración y el apoyo internacionales en materia de medio ambiente, entre otros medios con una mayor interacción dentro de la arquitectura de las Naciones Unidas para la consolidación de la paz. Debería prestarse especial atención a la creación de capacidad y al apoyo a proyectos que promovieran la resiliencia y la adaptación climáticas, sobre todo en los países en desarrollo. Ese enfoque también podría ofrecer más posibilidades de interactuar con las organizaciones regionales y subregionales para ayudar a los países en desarrollo a afrontar mejor los efectos transnacionales del cambio climático. También era preciso mejorar la colaboración entre las entidades de las Naciones Unidas para prestar un apoyo adecuado y eficaz a los países;

f) Intensificación de los esfuerzos para aplicar los principios de gobernanza eficaz para el desarrollo sostenible, que eran especialmente importantes en casos de fracaso gubernamental o de países en conflicto. La aplicación de los principios podría ayudar a mitigar los efectos del cambio climático a largo plazo y reducir los riesgos de conflictos graves derivados de sus repercusiones ambientales.

Capítulo IV

Labor futura del Comité

94. El Comité seguirá armonizando su programa de trabajo con las necesidades y prioridades establecidas por el Consejo Económico y Social a fin de contribuir con eficacia a las deliberaciones del Consejo y ayudarlo a desempeñar sus funciones. En su 23^{er} período de sesiones, el Comité examinará el tema que se apruebe para el período de sesiones de 2024 del Consejo y el foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible y preparará recomendaciones de políticas sobre la gobernanza y los aspectos institucionales de esa cuestión. El Comité invitará de nuevo a países y ciudades a realizar exámenes nacionales voluntarios y exámenes locales voluntarios, respectivamente, y a presentar sus experiencias y opiniones sobre las prácticas prometedoras en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 16 y 17, teniendo en cuenta la interrelación con todos los Objetivos.

95. El Comité reafirmó que los principios de gobernanza eficaz para el desarrollo sostenible, refrendados por el Consejo en su resolución [2018/12](#), seguían proporcionando un marco transversal útil e interconectado para su labor. Las perspectivas subnacionales también podrían convertirse en un componente transversal del análisis de políticas que realizara el Comité en el futuro. Del mismo modo, en la preparación y el transcurso del próximo período de sesiones, el Comité podría considerar la posibilidad de aplicar enfoques interdisciplinarios a los temas de su programa. Su análisis de los problemas podría, en la medida de lo posible, ir acompañado de asesoramiento práctico sobre soluciones de política.

96. El Comité decidió proseguir la práctica de organizar grupos de trabajo oficiosos entre períodos de sesiones para preparar la labor de su período de sesiones siguiente, teniendo presente la necesidad de elaborar análisis técnicos y especializados, evaluaciones y recomendaciones sobre políticas que sirvieran de base para la implementación de la Agenda 2030, según lo dispuesto en la resolución [72/305](#) de la Asamblea General.

97. Se acogió con satisfacción la contribución que hacían los observadores. Se podría prestar más atención a las formas de seguir mejorando la interacción con los observadores, por ejemplo, a través de una mayor colaboración de los miembros con las redes académicas y las comunidades de práctica sobre temas específicos del programa durante el período entre sesiones.

98. El Comité decidió continuar examinando sus métodos de trabajo y expresó su interés en seguir colaborando con el Comité de Políticas de Desarrollo y otros órganos subsidiarios del Consejo, la Comisión de Consolidación de la Paz y otros procesos de las Naciones Unidas, según procediera, como medio de promover los vínculos y fundamentar el enfoque integral del Consejo.

Anexo

Lista de documentos

<i>Tema del programa</i>	<i>Título o descripción</i>
2	Programa provisional anotado (E/C.16/2023/1)
3	Nota de la Secretaría por la que se transmite el documento de expertos sobre la transformación urgente de las instituciones para un mundo más verde, más inclusivo y más resiliente en un momento de múltiples crisis (E/C.16/2023/2)
3	Contribución del Comité al examen temático del foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible de 2023
5	Nota de la Secretaría por la que se transmite el documento de expertos sobre las instituciones públicas y el apoyo a la financiación para hacer frente al clima (E/C.16/2023/3)
6	Nota de la Secretaría por la que se transmite el documento de expertos sobre la promoción del principio de gobernanza relativo a la participación en apoyo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (E/C.16/2023/4)
6	Documento de sesión sobre la manera de determinar mejor dónde se encuentran los países en su camino hacia 2030
6	Documento de sesión sobre el uso de indicadores de gobernanza en los procesos de examen nacional voluntario y examen local voluntario y sobre su posible papel en la construcción de instituciones sólidas para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
7	Nota de la Secretaría por la que se transmite el documento de expertos sobre la reinversión de la formación y el aprendizaje institucional de la fuerza de trabajo del sector público para lograr un cambio de mentalidad (E/C.16/2023/5)
8	Nota de la Secretaría por la que se transmite el documento de expertos sobre la gestión de las finanzas públicas en época de emergencia e implicaciones para la credibilidad de los presupuestos (E/C.16/2023/6)
9	Nota de la Secretaría por la que se transmite el documento de expertos sobre la digitalización y la innovación en el sector público (E/C.16/2023/7)
10	Nota de la Secretaría por la que se transmite el documento de expertos sobre la construcción de instituciones sólidas para vincular el medio ambiente y la consolidación de la paz en los países afectados por conflictos (E/C.16/2023/8)

